a) Las infracciones muy graves desde de 30.050,61 a 300.506,05 euros.

b) Las infracciones graves desde 3.005,07 a 30.050,61 euros.

c) Las infracciones leves desde 300,51 a 3.005,06 euros.

2. Los responsables de infracciones graves y muy graves podrán ser sancionados, además, con la inhabilitación de hasta cuatro años para obtener subvenciones y ayudas públicas cuyo otorgamiento dependa de la Administración sancionadora, así como con la prohibición durante el mismo tiempo para celebrar contratos con la misma Administración. En el caso de infracciones relaciones con el uso del suelo rústico la inhabilitación del infractor para obtener subvenciones a que se refiere el párrafo anterior se extenderá a aquéllas que corresponda otorgar a la Comunidad Autónoma.

Artículo 223. Reglas para determinar la cuantía de las sanciones.

1. Las sanciones habrán de ser proporcionadas a la gravedad, entidad económica y trascendencia social de los hechos constitutivos de la infracción. Se tendrán en cuenta asimismo los demás criterios establecidos en la legislación del procedimiento administrativo común.

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerará circunstancia atenuante el haber corregido la situación creada por la infracción antes de la iniciación del expediente sancionador y circunstancia agravante el incumplimiento de los requerimientos efectuados por la Administración relacionados con la infracción de que se trate, así como la reincidencia en la misma infracción.

Cuando concurra alguna circunstancia agravante, la sanción se impondrá siempre en cuantía superior a la mitad de su máximo. Si concurriese alguna circunstancia atenuante, la sanción se impondrá en cuantía inferior a la mitad de su máximo.

Comunidad de Propietarios La Cerrada, con DNI número H39475122 es responsable de una infracción según lo previsto en el artículo 218 de la Ley de Cantabria 2/2001, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria.

RESUELVO

Sancionar con 1.000,00 euros, a Comunidad de Propietarios La Cerrada con DNI número H39475122, de acuerdo con lo previsto en el artículo 222 de la mencionada Ley.

Contra la resolución anterior, que agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de reposición ante el mismo órgano en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la presente notificación; o bien directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado del mismo nombre de Cantabria en el plazo de dos meses.

Camargo, 10 de febrero de 2009.—El alcalde presidente, Ángel Duque Herrera.

09/2793

AYUNTAMIENTO DE MARINA DE CUDEYO

Notificación de resolución de expediente sancionador

Habiendo sido imposible practicar la notificación de resolución número 115/09 de fecha 9 de febrero de 2009 a don Luis Fernando Laso Cano, con DNI número 13.765.186-P y vecino del pueblo de Liaño, barrio San Juan número 147 del término municipal de Villaescusa y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procédase a practicar la notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Villaescusa, en el Tablón de anuncios de este Ayuntamiento de Marina de Cudeyo y en el Boletín

Oficial de Cantabria, la citada resolución que a continuación se transcribe:

«RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA número 115/09.

Dada la incoación de expediente sancionador a don Luis Fernando Laso Cano, mediante providencia de fecha 12 de agosto de 2008, por la presunta comisión de una infracción a la «Ordenanza de Convivencia Ciudadana», consistente en «Quemar ocho tramos de 150 cm de largo aproximadamente de lo que parecía cable industrial, con objeto de extraer el contenido metálico de su interior», en el pueblo de Gajano, inmediaciones de la «Yesera « cual es constitutivo de infracción administrativa a la «Ordenanza de Convivencia Ciudadana».

Considerando que la «Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana» tipifica como infracciones administrativas los citados hechos en su artículo 9º, que señala en general que está prohibido, y en su caso, será sancionada toda acción que produzca malos olores, ruidos molestos y humos, así como perjuicios a terceros, en lugares de uso o servicio público y ello con independencia de la reclamación de los perjuicios causados.

Considerando que, en particular, tipifica como infracción administrativa a) «Encender hogueras sin autorización municipal» y b) «Realizar quemas de rastrojos sin autorización o con incumplimiento de las condiciones de la autorización, en especial en lo referente a los días y horario, condiciones meteorológicas y comunicación previa a la autoridad municipal».

Considerando que los hechos descritos son constitutivos de infracción administrativa de carácter grave (artículo 12 h) e i) OCM).

Vista la propuesta de resolución del expediente de fecha 10 de septiembre de 2008 y dado que el presunto infractor no ha formulado alegaciones en defensa de sus derechos e intereses ni reclamación alguna durante el plazo de audiencia (finalizado el 14 de diciembre de 2008)

Por la presente, vista la «Ordenanza municipal de Convivencia Ciudadana» y los artículos 18 del RD 1398/93, de 4 de agosto, y 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, esta Alcaldía, haciendo uso de las atribuciones que tiene conferidas,

HA RESUELTO

1) Sancionar a don Luis E. Laso Cano, vecino de Liaño, Ayuntamiento de Villaescusa, por encender hogueras sin autorización municipal, en el pueblo de Gajano, en las inmediaciones de la Yesera, mereciendo los hechos la calificación de infracción administrativa grave a la «Ordenanza de Convivencia Ciudadana», con una multa de 300,00 euros, por no ser apreciadas circunstancias agravantes ni atenuantes de la responsabilidad».

2) Dar cuenta del presente acuerdo al Departamento de Intervención.

3) Dar cuenta al interesado, para su conocimiento y efectos».

El acto en el que se contrae esta notificación pone fin a la vía administrativa, según se establece en el art. 52.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril. Por lo que, con arreglo a la legislación vigente contra el mismo puede Vd. interponer los siguientes

RECURSOS

1.- DE REPOSICIÓN.- Con carácter potestativo, según lo señalado en la Ley 4/1.999, de 13 de enero, ante el mismo órgano que hubiere dictado el acto impugnado en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la notificación de esta resolución (artículos 116 y 117 de la Ley 4/99).

2.- CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.- Ante el Juzgado de Contencioso Administrativo, con sede en Santander, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente

a la notificación de esta resolución o de la resolución expresa del recurso potestativo de reposición. Si en el recurso potestativo de resolución no se notificara resolución expresa en el plazo de un mes, deberá entenderse desestimado, pudiendo interponerse Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de seis meses, que se contará a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto. (Artículos 8 y 46 de la Ley 29/98 de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.)

Si fuera interpuesto recurso potestativo de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se haya resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

3.- Cualquier otro que estime procedente. (Artículo 58.2. Ley 4/1999).

Lo que traslado a Vd. para su conocimiento y efectos.

Marina de Cudeyo, 18 de marzo de 2009.—El alcalde presidente, Severiano Ballesteros Lavín.

09/3689

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Notificación de Decreto por la que se impone multa coercitiva, en denuncia número 865/05.

Con fecha 25 de agosto de 2008 se ha dictado el siguiente Decreto, cuya notificación al interesado no ha podido ser practicada, por lo que procede su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones.

Visto el Decreto de delegación de fecha 21 de junio de 2007, el concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, a la vista de los trámites y diligencias de este expediente, en uso de las atribuciones que le confiere la legislación vigente, dicta el siguiente,

DECRETO

Por Decreto de fecha de 23 de agosto de 2006 se ordena a «EMPRINVEST, SL», don Juan Hormaechea Cazón y doña María Elena Alonso García, y «PROMOTORA CÁNTABRA DE INMUEBLES, SA» para que en un plazo de cuatro meses se den comienzo con las obras de arreglo del inmueble sito en la avenida de Reina Victoria número 95. Este Decreto es confirmado por la Sentencia número 181/07 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santander, de fecha de 14 de junio de 2007.

Visto el informe técnico de fecha de 2 de junio de 2008 en el que se informa que las obras ordenadas no han sido realizadas, y se valoran aproximadamente las obras a ejecutar en 217.138,94 euros,

Considerando que el artículo 201.6 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, establece que el incumplimiento de las órdenes de ejecución podrán conllevar la imposición de multas coercitivas, en relación con el artículo 10.2 de la Ley de Propiedad Horizontal, 49/1960, de 21 de Julio, que establece que «los propietarios que se opongan o demoren injustificadamente la ejecución de las órdenes dictadas por la autoridad competente responderán individualmente de las sanciones que puedan imponerse en vía administrativa»,

Por todo ello, dispongo:

Imponer una multa coercitiva a «EMPRINVEST, SL», don Juan Hormaechea Cazón y doña María Elena Alonso García, y «PROMOTORA CÁNTABRA DE INMUEBLES, SA», de 3.005,06 euros, apercibiendo a la interesada que dicha multa puede ser reiterable en intervalos de tres meses, y hasta el límite legal de conservación para lograr la ejecución de las obras ordenadas (217.138,94 euros).»

Significarle que el plazo para el pago en período voluntario será el siguiente, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley 58/2003, 17 de diciembre, General Tributaria:

a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario, sin haber satisfecho la deuda, determinará el inicio del período ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora y del recargo del período ejecutivo del 5, 10 ó 20%, según corresponda (artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, 17 de diciembre, General Tributaria).

Contra el presente decreto podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante la Alcaldía Presidencia en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación del mismo.

Igualmente, podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cantabria, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de recepción de la notificación del decreto.

Si interpone recurso de reposición, podrá, igualmente, interponer el recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional y en el plazo que se indica en el párrafo anterior contra el decreto expreso del mismo; o en el de seis meses contra su desestimación presunta, que se producirá si no le es notificado decreto expreso en el plazo de un mes, contado a partir del día en que el recurso de reposición tenga entrada en el Registro General de este Ayuntamiento.

Podrá, no obstante, formular cualquier reclamación que entienda convenir a su derecho.

Santander, 25 de agosto de 2008.—El alcalde, Íñigo de la Serna Hernáiz.

09/2894

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Notificación de incoación de expediente sancionador número 535/08.

Habiendo sido imposible practicar la notificación de la resolución dictada por la señora concejala delegada de Medio Ambiente en fecha 9 de diciembre de 2008 a don Ricardo San Martín Cabeza y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procédase a practicar la notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Santander y en el Boletín Oficial de Cantabria de la citada resolución que a continuación se transcribe:

Primero: Que con fecha de 5 de julio de 2008 por la Policía Local se denunció a don Ricardo San Martín Cabeza como propietario de un vehículo marca Peugeot S1BOO, matrícula C 4743 BDF, que fue retirado de la calle Bonifaz por encontrarse en estado de abandono.

Segundo: El artículo 71.1.b) del RD Legislativo 339/1990 de 2 de marzo establece que: "Se presumirá racionalmente su abandono cuando permanezca estacionado por un período superior a un mes en el mismo lugar y presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios o le falten las placas de matriculación. En este caso tendrá el tratamiento de residuo sólido urbano de acuerdo con la normativa ambiental correspondiente".

En este sentido, según el artículo 25.2 de la Ordenanza Municipal de Gestión de Residuos Urbanos y Limpieza Viaria de Santander, los vehículos abandonados tienen la consideración de residuos urbanos o municipales.